

Debate sobre la sostenibilidad del sistema público de previsión social

“Las pensiones afrontan un desafío estructural que exige un pacto de Estado”

Los expertos Luis Vadillo, Santiago Álvarez e Iván Antonio Rodríguez urgen un consenso para reformar el modelo y garantizar su viabilidad



Por la izquierda, Luis Vadillo, Santiago Álvarez e Iván Antonio Rodríguez. | FERNANDO RODRÍGUEZ

“ Las opiniones

“Si las pensiones se hacen más sostenibles serán menos suficientes, y a la inversa”

Luis Vadillo
 Director del Instituto BBVA Pensiones

“No se puede decir que las pensiones estén garantizadas. Si el modelo colapsa, colapsa para todos”

Iván Antonio Rodríguez
 Profesor de Derecho del Trabajo

“Si no se hace nada, el déficit de la Seguridad Social pasará del 1% del PIB al 6% en 2040”

Santiago Álvarez
 Profesor de Hacienda Pública

Oviedo, J. CUARTAS

El sistema público de pensiones afronta un desafío estructural, y no coyuntural, en España y otros países avanzados y sólo podrá afrontarse con un pacto de Estado, planteando un modelo que no necesariamente deberá ser una réplica exacta de alguna de las opciones adoptadas en otras economías. Cualquiera de los diseños por los que se opte (actuando sobre los gastos, sobre los ingresos o sobre ambos) exigirá un compromiso social y político para llevarlo a cabo, sin que sea posible garantizar de antemano que la opción elegida sea la más idónea para la singularidad nacional (económica, cultural y de mentalidad colectiva), señalaron tres especialistas en la materia que participaron en un desayuno informativo organizado por LA NUEVA ESPAÑA y BBVA: Luis Vadillo, director del Instituto BBVA Pensiones; Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y miembro de la junta de gobierno del Colegio de Economistas de Asturias, e Iván Antonio Rodríguez, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo.

“A medio plazo podemos tener problemas de equilibrio porque estamos ante un problema estructural con un reto demográfico que tenemos encima. La transparencia es fundamental para que cada ciudadano sepa de cuánto dinero dispondrá cuando se jubile y es necesario establecer un mayor equilibrio entre lo cotizado y lo percibido. Se precisa un gran acuerdo de partidos políticos y agentes sociales para afrontar el desafío”, indicó Luis Vadillo en el debate, moderado por Luis Gancedo, jefe de Economía de LA NUEVA ESPAÑA.

“Todos los países avanzados”, expresó Iván Antonio Rodríguez, “nos enfrentamos al mismo problema de sostenibilidad porque es un reto demográfico. Se han desarrollado diversas opciones. En Suecia han optado por las cuentas nacionales; en Alemania, por un sistema de puntos; en otros países por un modelo de tres pilares: pensión pública universal que garantiza una prestación mínima para todos, un 50% en función de las cotizaciones que se hayan hecho y el 40% en relación a un plan privado de pensiones dentro de la empresa. A ello se suman los planes privados individuales. Nadie tiene una solución eficaz y no se sabe cuál es la mejor porque esto lo dirá el tiempo y dependerá de cómo se gestio-

ne”. A juicio de Rodríguez, “en el debate hay elementos ideológicos muy evidentes y esto es lo que dificulta el consenso. Mientras unos prefieren actuar para contener el gasto, otros hacen énfasis en el aumento de los ingresos”. “Pero no tenemos claro qué hacer. No tenemos proyecto y lo que proponen unos lo combaten los otros. No se puede aprobar un día el factor de sostenibilidad de las pensiones como un elemento imprescindible para garantizarlas y luego posponerlo para conseguir aprobar los presupuestos. Sin un pacto de Estado, las pensiones se utilizarán como arma electoral, cualquier reforma estará abocada al fracaso y el sistema explotará”, dijo Rodríguez.

Para Santiago Álvarez, “vivimos más, hay un problema de envejecimiento demográfico y existen altas tasas de desempleo y cotizaciones menores. En consecuencia, la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones es un desafío fundamental que exigen cambios. Hay distintas opciones: retrasar la edad de jubilación, imponer requisitos más rigurosos para tener derecho a

la prestación máxima o plantear mayores aportaciones al sistema. Hoy tenemos un sistema contributivo y de reparto (las pensiones se financian con las cotizaciones de los que están trabajando) y se puede ir a una transición hacia un modelo más universal financiado con impuestos (lo que favorecería a los jóvenes, que hoy tienen dificultades para lograr carreras largas de cotización) o crear incentivos para completar la pensión con un sistema privado de capitalización. También se puede ir a un modelo menos generoso que el actual: la tasa de sustitución (importe de la pensión respecto al último salario) hoy está en España, de media, en el 80% cuando en otros países se sitúa en el 50% e incluso menos, como ocurre en los nórdicos”.

La viabilidad del sistema está también comprometida por tendencias que se agudizan: “Las nuevas pensiones son mayores que las que desaparecen por fallecimiento y además el modelo actual es cada vez más generoso si tomamos en cuenta la pensión media (1.300 euros) frente al salario medio (900 euros)”, señaló Vadillo. A su juicio, “hacer que el sistema sea más sostenible implicará que sea menos suficiente y a la inversa. Se pueden subir o crear nuevos impuestos pero hay que ver cómo: la tasa a las transacciones financieras recaudaría 800 millones y el déficit de las pensiones es de 19.000 millones”.

“Un problema estructural (de sostenibilidad) requiere medidas distintas que si fuese coyuntural (de liquidez). Tenemos un escenario a diez o veinte años, que es cuando se va a jubilar la generación del “boom” de natalidad que se produjo a partir de los años sesenta. Y además tenemos una esperanza de vida muy superior a cuando en 1919 se crearon las primeras pensiones públicas”, argumentó el profesor Rodríguez. “Como las pensiones se pagan no con lo que cotizaron los actuales pensionistas sino con las contribuciones de los que ahora están trabajando, dado que tenemos un sistema de reparto”, alertó, “hay que desmentir que las actuales pensiones estén garantizadas: si colapsa el sistema, colapsa para todos. No habrá diferencia entre los que ya llegaron a la jubilación y los que aún no”.

Según Santiago Álvarez, “hoy el sistema tiene un déficit equivalente al 1% del PIB y, si no se hace nada, será del 6% en 2040, según dos estudios de la UE y del Consejo General de Economistas, lo que

obligaría a desplazar a las pensiones el gasto que ahora se destina a otros fines o generar más ingresos para ese fin”. En su opinión, “las medidas que se tomen deben plantearse a medio plazo para que todo el esfuerzo no caiga sobre un solo grupo de población”.

Un pensionista, explicó Vadillo, “percibe el 44% más de lo que ha cotizado en su vida laboral y para hacer sostenible el sistema actuante sobre el gasto debería percibir una cantidad parecida a la cotizada”. Sin embargo, “la población de más edad cada vez pesará más en el electorado”, alertó Álvarez, “y sin reforma del gasto, el peso de la carga caerá cada vez más sobre la gente que trabaja. Podríamos incurrir en una redistribución inversa: aumentar las cargas a personas con salarios bajos para costear prestaciones elevadas para los ya jubilados. Y si subimos las cotizaciones a la Seguridad Social, estaremos encareciendo el factor trabajo, con lo que, a mayor coste laboral, se creará menos empleo. A su vez, los jóvenes tienen una incorporación más tardía al mercado laboral y sus salarios de entrada son más bajos, con lo que sus carreras de cotización y sus cotizaciones serán

menores y tendrán derecho a pensiones más reducidas. En Dinamarca no hay cotizaciones sociales y tienen un sistema universal que se financia con el IVA, con lo que el coste se distribuye sobre toda la población”. Pero en España “el IVA recauda 42.000 millones y cubrir con él el déficit de las pensiones absorbería la mitad de ese importe”, indicó Vadillo. “Por eso hace falta transparencia: plantear las opciones y sus costes, y decidir. Si se opta por la vía tributaria, sólo el IRPF y el IVA tienen suficiente capacidad recaudatoria pero eso exigirá detraer recursos de otros fines. Y si hay transición hacia un modelo más universal debe ser ordenada”, afirmó Álvarez.

Iván Rodríguez cree que debe pronunciarse la sociedad: “Parece que culturalmente en España se prefiere un sistema público de pensiones. Pero las cotizaciones no dan para pagar las pensiones y quizá deba ser la gente la que decida el modelo y cómo se paga. Yo no copiaría un modelo ajeno porque puede fracasar aquí por factores culturales. El debate no es público o privado, sino si se diseña bien y se gestiona bien. Hay que ser funcional, no dogmático”.



z



Por la izquierda, Iván Antonio Rodríguez, Luis Gancedo, Luisa María López y Eduardo Suárez –directora comercial y gerente de LA NUEVA ESPAÑA–, Santiago Álvarez y Luis Vadillo, durante el coloquio. | FERNANDO RODRÍGUEZ